

Frente a atentados en vías concesionadas:

CCI hace fuerte llamado a la Fiscal General de la Nación

Bogotá, 15 de diciembre de 2025. La Cámara Colombiana de la Infraestructura expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia que hoy amenaza de manera directa la operación de las vías concesionadas del país y, de igual manera, alza su voz por la ausencia de respuestas efectivas de la Fiscalía General de la Nación frente a hechos que se repiten sin acciones judiciales visibles.

La semana pasada se registró el atentado contra el peaje Cabildo, de la concesión Vías del Nus. A este hecho se suma el reciente ataque contra el peaje Lizama, en la vía que conduce a Barrancabermeja, acción que de manera preliminar ha sido atribuida al ELN. Estos episodios confirman una realidad que ya no admite eufemismos: las vías concesionadas se han convertido en blanco recurrente de grupos armados ilegales, ante la mirada pasiva de la Fiscalía.

No se trata de hechos aislados. En la Ruta del Sol III, en las troncales del Magdalena y en la vía Popayán-Santander de Quilichao, por mencionar casos transcurridos en los últimos meses, se destruyeron más de 40 máquinas y se puso en alto riesgo la integridad de ciudadanos y trabajadores.

Sumado a lo anterior, entre 2023 y 2025 se han presentado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados, una cifra, a todas luces, incompatible con el deber constitucional de garantizar el orden público y la libre movilidad. Estos bloqueos

han ocasionado pérdidas económicas cercanas a los 10 billones de pesos, lo cual ha impactado la competitividad del país, el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de miles de colombianos.

Por otra parte, asonadas en las estaciones de peajes y recaudos irregulares de dinero por parte de grupos que cobran el paso de vehículos sin tener ningún tipo de autorización constitucional o legal agravan este panorama de falta de intervención judicial.

Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura hacemos un llamado enfático a la fiscal general, Adriana Camargo. “La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones. La Fiscalía no puede limitarse a reaccionar con simples pronunciamientos: el país requiere investigaciones oportunas, judicialización efectiva y resultados concretos”, señaló Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

El Estado, amparado en la Constitución, tiene la obligación indeclinable de garantizar la seguridad y la libre movilidad en el territorio nacional. Proteger la infraestructura vial no es una causa gremial ni sectorial. Es defender la inversión pública, preservar la confianza privada y, ante todo, proteger la vida de los ciudadanos. La inacción institucional frente a esta violencia no solo debilita al sector, sino que erosiona la autoridad del Estado y la confianza.

Finalmente, la CCI reconoció la disposición de la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa, en proveer mejores condiciones de seguridad en las vías concesionadas, sin embargo, reitera su llamado para que exista mayor pie de fuerza del Ejército Nacional en los puntos críticos.